

Boletín Oficial

PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Pedro Lozano, Calle de San Pedro núm. 14, á 80 rs. al año para esta Capital, y 96 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

MINISTERIOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan sin novedad en su importante salud.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Número 266.

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 20 del que rige me comunica de Real orden lo que sigue:

En vista de las comunicaciones que V. S. ha dirigido al Ministerio de Fomento relativas á la escasez de cereales que se nota en esa provincia, se comunica con esta fecha orden al Consúl de España en Oporto para que de las existencias de trigo que debe haber en aquel punto de propiedad del Estado, remita á la consignación de V. S. cuanto mil fanegas al puerto de Vigo. Al comunicar á V. S. esta resolución debo prevenirle que es necesario se presente allí con la anticipación necesaria, un representante de V. S. á apresurar la descarga, recibir el grano y satisfacer el flete si no se ha hecho en Oporto, para evitar el abono de sobreestadias dirigiendo aquel en seguida á los puntos de esa provincia en que V. S. juzgue mas conveniente dis-

tribuirlo y entregándolo á la municipalidad de la localidad respectiva, quien abonará su importe al precio que esté en relacion con la calidad del trigo y el que tenga en el mercado el de clase análoga, ingresando los fondos en Tesorería con las formalidades establecidas por punto general; advirtiéndole á V. S. por último que los gastos á que este servicio de lugar, se imputarán al crédito de sesenta millones de reales concedido por Real decreto de 28 de Octubre último, y que el Gobierno confía en que nada omitirá V. S. para que el mencionado servicio se desempeñe con regularidad y la mayor economía posible para el Tesoro. De Real orden lo digo á V. S. para los efectos indicados.

Lo que se inserta en el Boletín oficial para conocimiento del público y demás efectos que convengan, mientras que este Gobierno de Provincia no determina las medidas oportunas para la conducción y distribución de los granos en aquellas localidades que mas necesidad tengan de este auxilio, sobre lo que está ocupándose. Orense 25 de Mayo de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Núm. 267.

CENSO DE POBLACION.

No dudo que los señores Alcaldes y demás individuos que componen las Juntas municipales del Censo de población, tendrán presente el deber que les impone el art. 67 de la Real Instrucción de 14 de Marzo último, de dar terminado los trabajos que les están encomendados á los 20 dias precisamente de haber recojido las cédulas, que espiran el 11 del próximo Junio, pasando por el conducto que el mismo expresa á la respectiva de partido; pero en el caso

de que no se incurra en descuido y de alejar todo motivo por el cual sea aunque sensible á mi autoridad forzoso el exigir la responsabilidad, se lo recuerdo confiando en que al puntual cumplimiento reunirán las operaciones la exactitud que requieren. Orense 25 de Mayo de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Número 268.

Segun es conocido y verán por mi precedente circular, se halla cercano el día en que las Juntas de partido del Censo de población han de recibir los trabajos ejecutados por las municipales y ocuparse de los que les marcan los artículos 68 y 69 de la recordada Instrucción.

Al celo de los Sres. Jueces de primera instancia presidentes de aquellas y de las demás personas que las constituyen, no puede ocultarse la obligación en que están de proceder llegado el caso, tan activa como es escrupulosamente, consultando á la vez los datos que puedan haber adquirido para la mejor comprobación y mas fácil descubrimiento de cualquiera omisión ó equivocación en que se haya incurrido, que me avisarán en el acto de encontrarla, si consistiese en haber dejado de empadronar á algun individuo ó en otra falta que suponga malicia para exigir la responsabilidad de quien haya lugar, rectificándose desde luego si no fuese de esta naturaleza.

Descanso, pues, en la seguridad de que las Juntas de partido nada dejarán que hacer para corresponder á su misión de la manera satisfactoria que espero. Orense 25 de Mayo de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

Número 269.

En las Gacetas correspondientes á los dias 10 y 11 de Marzo último, se leen los Reales decretos siguientes:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Subsecretaria.—Negociado 2.º

Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien expedir el Real decreto siguiente:

«En el expediente y autos de com-

petencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Valencia y el Juez de primera instancia de Liria, de los cuales resulta: que en 8 de Agosto de 1855 acudió Antonio Marques con un interdicto al Juez en queja de que se le habia interrumpido en la posesion de una servidumbre de tránsito para un predio de su propiedad, constituida sobre otro predio colindante, que pertenece á la Junta de Beneficencia de Benaguacil, siendo este cerrado con cerco de cañas por orden de la Junta de Beneficencia de la misma villa; y que el Juez, recibida la correspondiente informacion sumaria, dió el día 14 auto de amparo:

Que notificada la Junta de Beneficencia, de que formaban parte el Alcalde y un Regidor de Benaguacil, recurrió el primero al Juez en solicitud de que dejase sin efecto su proveido, en atencion á mediar un acuerdo, que acompañaba certificado, en que consta que en 5 del referido mes, el Ayuntamiento, enterado de una reclamación que le dirigió Antonio Marques sobre la misma cuestion, la habia desestimado, porque, á juicio de la corporacion municipal, la entrada del predio de Marques fue siempre por otro punto, y de dársele la que deseaba, iban á causarse perjuicios á las tierras que se hallaban declaradas en venta del clero de Liria, las cuales habria de atravesar en toda su longitud:

Que el Juez, previo traslado de este escrito á Antonio Marques, dió auto en 30 de Agosto para que se estuviese á lo mandado en su proveido del 14; y que el Alcalde interpuso el día siguiente apelacion para el caso en que el Gobernador, á quien recurrió por separado, no suscitase competencia:

Que admitida la apelacion en el efecto devolutivo, y dada comision para que se ejecutase lo proveido en el interdicto, recibió el Juez un exhorto del Gobernador en que le requeria de inhibicion, invocando el art. 19 de la ley de 3 Febrero de 1825, entonces vigente, en el concepto de que el Ayuntamiento habia ya fallado sobre la reclamación de Marques, tomando un acuerdo que no podia ser revocado por el interdicto, segun la Real orden de 8 de Mayo de 1839.

Que el Juez comunicó el exhorto al promotor fiscal, á Antonio Marques y á la Junta de Beneficencia, exponiendo ahora esta última, por medio de su Presidente el Alcalde de Benaguacil, que Marques supone tener el tránsito á senda de su campo por el cajero de la

acequia de Campos, el cual, como todos los de su especie, no puede destinarse á usos particulares, y que en este concepto adquiria un nuevo carácter administrativo, que hacia inprocedente el interdicto, el acuerdo del Ayuntamiento negando á Marques la servidumbre que solo jurídicamente podía haber tenido y sobre que versaba su reclamación.

Que el Juez se declaró competente, y comunicó el auto en que así lo acordó y el dictamen fiscal al Gobernador, y que este, oída la Diputación en funciones de Consejo provincial, y apoyado en los mismos fundamentos de su primera comunicación, sostuvo la presente competencia:

Visto el art. 19 de la ley de 5 de Febrero de 1853, que pone al cuidado de los Ayuntamientos la construcción y conservación de los caminos rurales y de travesía en su territorio, y de todas aquellas obras públicas de utilidad y ornato que pertenezcan al término de su jurisdicción, y que se dirijan á la utilidad ó comodidad de su vecindario.

Vista la Real orden de 8 de Mayo de 1859, que prohíbe los interdictos posesorios en cuanto tienen por objeto dejar sin efecto las providencias de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en materia de su legal atribución.

Vistas las Reales ordenes de 22 de Noviembre de 1856 y 20 de Julio de 1859, que encargan á los Jefes políticos, hoy Gobernadores, y á los Alcaldes la observancia de las ordenanzas, reglamentos y disposiciones superiores, relativas á la conservación de las obras púlicas, distribución de aguas para riego, molinos, y otros artefactos.

Considerando: 1.º Que no hay providencia legítima de la Administración á que pueda atribuirse como causa inmediata el despojo que motivo el interdicto propuesto contra la Junta de Beneficencia de Benaguacil por Antonio Marques ante el Juez de primera instancia de Liria.

2.º Que tampoco puede llamarse acuerdo legalmente administrativo la negativa del Ayuntamiento á la reclamación de Marques, toda vez que versa sobre una cuestión referente á cierta servidumbre, meramente privada, sobre la cual no ha dado atribuciones á la Autoridad municipal la disposición de la ley de 5 de Febrero de 1825 que invoca el Gobernador de Valencia, quedando por lo mismo justificada la procedencia del interdicto, y sin aplicación la Real orden de 8 de Mayo de 1859, que tambien se cita.

3.º Que, esto no obstante, la Administración podrá ejercer las facultades que la confieren las dos Reales ordenes en su lugar referidas de 22 de Noviembre de 1856 y 20 de Febrero de 1859, si, según la vaga afirmación del Alcalde de Benaguacil, fuesen necesarias para conservar expedito el cajero de la acequia de Campos.

Oído el Consejo Real, vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en palacio á 4 de Marzo de 1857.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, Cándido Nocedal.

De Real orden lo comunico á V. E. con devolución del expediente y autos á que se refiere esta competencia, para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1857.—Cándido Nocedal.—Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expedir el Real decreto siguiente:

«En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador de la provincia de Leon y el Juez de primera instancia de Sahagun, de los cuales resulta: que la consecuencia de queja dada por el padeño y varios vecinos de Santa Olaya de la acción contra Froilan Fernandez de la misma vecindad, por haberse excedido en la corta de 50 robles de los montes comunes, que aparecieron en su mayor parte distintos de los que, en virtud de autorización del Gobernador de la provincia, se le habian señalado por el perito agrónomo, el Alcalde, de Cebanico procedió á practicar diligencias en averiguación del hecho, y las remitió al Juez de primera instancia de Sahagun.

Que continuado por el Juez el procedimiento, ejecutado el embargo de los arboles cortados, los cuales se encontraron todos en los indicados montes comunes y recibida indagatoria á Fernandez, acudió este al Gobernador quien manifestó al Juzgado que, previniendo la corta de concesion otorgada por la Administración, á esta competia decidir si al hacer la corta se habian guardado las condiciones y formalidades debidas, y á sus empleados fijar el valor ó sobreprecio que pudiera existir entre la madera cortada y la concedida, para venir en conocimiento de si el daño habia sido de mayor ó de menor cuantía; por lo que lo cual proponia al Juez la inhibición, ó que en otro caso, con suspensión del procedimiento, se sirviese remitirle las actuaciones, á fin de formalizar, en su vista y previos los trámites legales, la competencia que pudiera ser procedente.

Que el Juez, oído el Promotor fiscal y de acuerdo con su dictamen, dió auto motivado, declarandose competente, y lo manifestó en forma al Gobernador, recibiendo luego una comunicación del Comisario de Montes, con la declaración que tenía reclamada el Juzgado del perito agrónomo en que este apreciaba en 105 rs. el exceso del valor de las maderas cortadas sobre las que por el mismo se habian señalado para la corta.

Y que, por último, habiendo insistido el Gobernador, separándose del dictamen del Cuerpo consultivo de la provincia, resultó esta competencia.

Visto el Real decreto de 2 de Setiembre de 1854, en cuya virtud han estado vigentes, al suscitarse esta contienda, las leyes, Reales decretos y disposiciones relativas al régimen de los montes pertenecientes á los propios y comunes de los pueblos.

Vistas las ordenanzas generales de Montes de 1855:

Visto el art. 49 del Reglamento de Montes de 24 de Marzo de 1846, que dispone que el Alcalde del pueblo en cuyo término se hubiese cometido contravención ó delito de los marcados en la ordenanza, imponga la pena que corresponda, si el daño ocasionado fuese de menor cuantía, ó que en otro caso, después de instruidas las primeras diligencias, las pase al Juzgado de primera instancia del partido expresando que se consideran como daños de menor cuantía aquellos en que el resarcimiento de daños y la pena pecuniaria que se impusiere no exceda de la cantidad que por vía de multa pueden aplicar gubernativamente los Alcaldes con arreglo al art. 75 de la ley de 8 de Enero de 1845:

Visto el citado artículo de esta misma ley, que faculta al Alcalde para aplicar gubernativamente las penas señaladas en las leyes y reglamentos de policía y en las ordenanzas municipales; é imponer y exigir multas hasta 100 rs. en los pueblos que no lleguen á 500 vecinos, hasta 500 en los que no lleguen á 5,000, y hasta 500 en

los restantes, debiendo instruir, en los casos en que la infracción ó falta mereciese penas mas severas, la correspondiente sumaria, que pasará al Juez ó Tribunal competente:

Vistas las disposiciones 1.ª, 2.ª y 3.ª del Real decreto de 13 de Mayo de 1855, según los cuales, las faltas que con arreglo al código penal ó á las ordenanzas y reglamentos administrativos merezcan pena de arresto, deberán ser castigadas siempre en juicio verbal, conforme á la ley para la ejecución del mismo Código, pero aquellas cuya pena sea multa, ó reprobación y multa, podrán ser castigadas gubernativamente á juicio de la Autoridad administrativa á que esté encomendada su reprobación; conservando los Alcaldes la facultad gubernativa de imponer multas hasta en la cantidad que permite la ley citada en el artículo preinserto.

Visto el art. 5.º párrafo primero del Real decreto de 4 de Junio de 1847, que prohibe á los Jefes políticos, hoy Gobernadores, suscribir contienda de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que hayan de pronunciar los Tribunales ordinarios ó especiales.

Considerando: 1.º Que en el estado en que se encuentra el negocio sobre que versa la presente contienda, es ya innecesaria la intervención que reclama el Gobernador de la provincia de Leon para reconocer si ha habido ó no abuso de la concesión de maderas que otorgó, porque el abuso se halla ya acreditado en las declaraciones policiales de naturaleza especial que obran en autos.

2.º Que, por lo tanto, el Gobernador solo hubiera podido sostener la contienda en el caso de que los daños que aparecen, atendidos el censo de población del pueblo en cuyo término se han causado y la poca gravedad de sus circunstancias, fueran de menor cuantía y debieran corregirse gubernativamente, con arreglo á las varias disposiciones mencionadas.

3.º Que esta circunstancia no se halla demostrada en el expediente formado por el Gobernador, y que mas bien hay motivos para creer que no llega á 500 vecinos la población del término jurisdiccional de Cebanico; por lo cual, excediendo el daño causado de 100 rs., maximum de lo que en el solo concepto de multa podría imponer gubernativamente el Alcalde de aquel Ayuntamiento, conforme á la ley municipal y demás disposiciones citadas, carece de facultades la Administración para conocer en el caso:

Oído el Consejo Real, vengo en declarar mal formada esta competencia, y que no ha lugar á decidirla.

Dado en Palacio á 4 de Marzo de 1857.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de la Gobernación, Cándido Nocedal.

De Real orden lo digo á V. S., con devolución del expediente á que se refiere esta competencia, para su inteligencia y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1857.—Nocedal.—Sr. Gobernador de la provincia de Leon.

Los que se insertan en este periódico oficial para conocimiento del público. Orense 25 de Mayo de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uría.

En la Gaceta correspondiente al día 21 del actual núm. 1.598, se leen las Reales ordenes siguientes:

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Núm. 10.—Circular.

El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director general de Infantería lo que sigue:

«Enterada la Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E. fecha 18 de Abril próximo pasado, en que manifiesta que el Capitán de infantería destinado á la cuarta compañía del regimiento de reserva número 150, Manuel Moreno y del Pozo, no se ha incorporado al mismo en el término que está prevenido, ni justificado su existencia, se ha servido resolver que este Oficial sea baja definitivamente en el Ejército, publicándose en la orden general del mismo, conforme á lo dispuesto en Real orden de 19 de Enero de 1850; siendo al propio tiempo su Real voluntad que esta disposición se comunique á los Directores é Inspectores de las armas y Capitanes generales de distrito, así como al Señor Ministro de la Gobernación, para que llegando á conocimiento de las Autoridades civiles y militares no pueda aparecer en punto alguno con un carácter militar que ha perdido con arreglo á Ordenanza y ordenes vigentes.

De Real orden, comunicada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1857.—El Subsecretario, Manuel Mañosa de Zubiga.

10911 112 22 22 22 22 22 22

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Oficio de la Gobernación.

El Sr. Ministro de la Gobernación dice con esta fecha al Gobernador de la provincia de Burgos lo que sigue:

«Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de la consulta dirigida á este Ministerio por la Diputación de esa provincia con fecha 15 de Octubre último, acerca de si las plazas de Milicianos provinciales que han correspondido á varios años que se hallan en el extranjero deben cubrirse con la fianza de 6,000 reales que prestaron para garantizar su responsabilidad ó llamarse en su lugar á los suplentes á quien correspondía, en cuyo caso se encuentran Vicente Diaz, quinto de la reserva por el cupo del Valle de Zomanzas, residente en Lima, y otros dos individuos mas de Espinosa de los Monteros, que pasaron á Méjico.

Vistos el art. 117 de la ley de 18 de Junio de 1854, el 127 de la ley vigente de reemplazos y el 57 de la Instrucción para llevar á efecto la organización de las Milicias provinciales:

Considerando: 1.º Que los mozos que se hallan en la edad de 18 á 25 años cumplidos no pueden pasar á país extranjero sin depositar antes la cantidad de 6,000 rs. ni otorgar escritura de fianza para responder á la responsabilidad que pudiera haberles.

2.º Que con arreglo á las disposiciones vigentes el mozo que hallándose en el extranjero no se presenta á servir su plaza en el término que le fuere señalado, pierde el depósito, ó se hace efectiva la fianza para invertirse en cubrir la vacante.

3.º Que están obligados al sorteo para las Milicias provinciales todos los

nes por mas de 5,000 varas, y en este caso se aumentarán los depósitos, segun las clases, en proporcion al número en que aquellas excedan.

Los interesados podrán retirar dichos depósitos despues del remate, á excepcion de los dueños de las proposiciones que fuesen declaradas admisibles, quienes los continuarán hasta que por S. M. se haga la adjudicacion definitiva, y mientras dure la responsabilidad que contraigan.

4.º Las proposiciones se harán en pliegos cerrados, distinguiéndose con un lema, y en ellos se figurará la cantidad en que el licitador se compromete á prestar el servicio. Estas proposiciones, con la carta de pago ó certificación que acredite haberse hecho el depósito que marca la condicion 5.º, se entregarán en la mesa de la presidencia durante la media hora anterior á la que se anuncia para la subasta, sin que puedan admitirse otras nuevas desde el momento en que empieza el acto, y se extenderán bajo la fórmula siguientes:

«Conformándome con todas las condiciones fijadas en el pliego aprobado por S. M. para contratar paño con destino á los presidios del reino, me obligo á entregar..... varas iguales á la muestra adjunta al precio de..... cada una, con el ancho de..... cuartos, y peso de... libras y..... onzas cada cuatro varas.»

El lema servirá de firma.

Todas las cantidades han de expresarse en letra, y no se admitirá proposicion alguna por menos de 5,000 varas.

5.º Se declara inadmisibile toda proposicion que no se halle redactada en los términos expresados en la condicion anterior, y á la que no vaya unido el comprobante del depósito, ó que contenga alguna cláusula condicional ó exclusiva.

6.º Acompañará á cada proposicion, en distinto pliego y bajo el mismo lema, otro cerrado, que contenga el nombre y domicilio del proponente, el cual lo autorizará con su firma. Para distinguir los pliegos, se pondrá en el sobre de cada uno y encima del lema *proposicion ó nombre del proponente*. De estos solo se abrirán, despues de hecha la adjudicacion del remate, los que correspondan á los postores agraciados, devolviéndose los demas á sus dueños.

7.º La subasta se verificará en Madrid á la una del día 29 del corriente en el local que ocupa el Ministerio de la Gobernacion del Reino ante escribano público, presidiendo el acto el Señor Director general de Establecimientos penales, asistido de un Oficial del negociado de Presidios, dándose principio al acto con la lectura del presente pliego, leyéndose despues las proposiciones presentadas.

8.º La Direccion de Establecimientos penales, con presencia de las muestras presentadas, consultará con el perito ó peritos, que designe de antemano, acerca de su calidad, y de si son iguales á las escogidas como tipo. En vista de su informe, y mientras recae la aprobacion de S. M., adjudicará provisionalmente el remate á los licitadores que hayan presentado proposiciones mas ventajosas; entendiéndose por tales las que se hagan por los paños de la primera y última clase, es decir, los de precio mas alto y mas bajo, entre los que se tomarán las 20,000 varas por partes iguales, si hubiese posibilidad para ello; y si faltasen, se completarán del mismo modo con las dos clases de paño restantes.

9.º Si hubiere dos ó mas proposiciones iguales y admisibles, el Director lo pondrá en conocimiento de los proponentes, por si les conviene reducir el precio, y si estuvieren presentes, abrirá una licitacion por el término de 15 minutos entre los interesados en ellas únicamente.

10. Hecha la adjudicacion, se exten-

derá el acta correspondiente de la subasta, sin admitirse proposicion alguna sobre mejora de precio por ventajosa que sea.

11. Declarada por S. M. la adjudicacion definitiva, se elevará el contrato á escritura pública, siendo de cuenta del rematante los gastos de ella y de dos copias, una para la Direccion de Establecimientos penales, y la otra para la Ordenacion general de Pagos de este Ministerio, como tambien la satisfaccion al escribano del papel sellado y los derechos que le correspondan por el acto de la subasta.

12. Las entregas del paño contratado tendrán lugar dentro del mes siguiente al de celebrado el remate.

13. Precederá á la admision de cada entrega el reconocimiento de un perito nombrado por la Direccion. Si de su examen resultase admisible el paño, se facilitará al contratista, por la persona que de él se haga cargo, la correspondiente certificación, y en su vista se expedirán inmediatamente las libranzas necesarias para su pago. Si el informe del perito fuese contrario al recibo del paño, podrá el contratista elegir otro por su parte, quedando la Administracion facultada para el nombramiento de un tercero en caso de discordia. Cuando el dictamen de este sea opuesto á la admision del paño, deberá el contratista retirarlo, quedando obligado á reponer las varas que se le desechen antes de que transcurran 15 dias. Los perjuicios que por cualquiera de las circunstancias expresadas ó falta de puntualidad se irroguen al servicio público serán de cuenta del contratista.

14. El contratista perderá la fianza si no satisficere la obligacion contraida, quedando ademas responsable con sus bienes al cumplimiento de la misma.

15. El contratista queda sujeto á lo que previene el artículo 5.º del Real decreto de 27 de Febrero de 1852, si dejare de cumplir los requisitos que debe llenar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga lugar en el término de ocho dias.

16. El anuncio para esta subasta se insertará en la Gaceta, cuidando los Gobernadores de que se publique luego que lo reciban, en los Boletines oficiales, y despues cada 10 dias hasta el designado anteriormente para la misma.

Madrid, 12 de Mayo de 1857.—El Director general, Dionisio Gainza.

Lo que se inserta en el Boletín oficial de esta provincia para conocimiento del público Orense 18 de Mayo de 1857.—El Gobernador, Pablo de Uria.

SEPTIMA SECCION.

Juzgado de Paz de Celanova.

Don Julian Nuñez Araujo, abogado de los tribunales nacionales y juez de paz primero de esta villa, etc.

Hago notorio: que en juicio verbal celebrado en mi audiencia á solicitud de D. Florencio Maria Mármol de esta villa, contra José Martinez de Teigeira, se dictó la sentencia que dico así:

En la villa de Celanova á 14 dias del mes de Mayo de 1857: resultando de las anteriores diligencias que D. Florencio Maria Mármol, reclamó en juicio verbal de José Martinez de Teigeira, de la alcaldia de Cartelle, la cantidad de 254 rs. en virtud de obligacion otorgada á su favor: que convocadas las partes para la comparecencia prevenida en el art. 1,167 de la ley de enjuiciamiento civil, para las 9 de la mañana del día 4 del actual, segun las diligencias que respectivamente se les

han practicado, ha dejado de verificarse el demandado: que continuado el juicio en la forma prescrita en el artículo 1,173 de la misma ley, justificó plenamente el D. Florencio Maria Mármol la certeza de su reclamacion por la obligacion menos solemnemente de 29 de Noviembre del año pasado de 1855, que ha exhibido, otorgada á su favor por el Martinez por la cantidad demandada; cuyo contenido han reconocido los testigos que á ella fueron presenciales, en los dias 4 y 13 del corriente. Teniendo presente ademas, lo que se dispone en el art. 317 de la referida ley; el Señor D. Julian Nuñez Araujo, abogado de los tribunales nacionales y juez de paz primero de esta villa, por antemí secretario dijo: que debia de condenar y condena al pago de los 254 rs. con las costas, á José Martinez, á término de sexto día; y pasado se proceda á hacerlo efectivo en sus bienes: notifíquese esta sentencia en la forma que se ordena en el art. 1,183, y publíquese en el Boletín oficial de esta provincia conforme al 1,190 de la propia ley de enjuiciamiento. Y por esta definitivamente juzgando en primera instancia así lo mandó y firma de que yo secretario certifico.—Lic. Julian Nuñez Araujo.—Francisco Vazquez Rodriguez, secretario.—Y para los fines prevenidos se pone el presente en Celanova á 15 de Mayo de 1857.—Julian Nuñez Araujo.—Francisco Vazquez Rodriguez, srio.

Juzgado de primera instancia de Lugo

En causa que se instruye en el juzgado de primera instancia de Lugo contra Julian y Angel Corral y Ramon Garcia, de S. Martin de Cotá sobre la existencia en su poder de una yegua de sospechosa procedencia y cuyas señas se expresan á continuacion, se cita, llama y emplaza á las personas que se crean con derecho á la misma, para que dentro de 30 dias se presenten á deducirlo en el mismo y reconocer aquella, con apercibimiento de determinar en otro caso lo que corresponda. Lugo Mayo 18 de 1857.—José Maria Ulloa.

Señas de la yegua.

Edad de 3 á 4 años, alzada 5 cuartas y media, color castaño oscuro, una estrella en la frente, desherrada y con una pequeña inflamadura en el pie derecho.

SECCION DE ANUNCIOS.

Á LOS MUNICIPIOS Y JUZGADOS DE PAZ.

ALMANAQUE ADMINISTRATIVO para los secretarios de ayuntamiento, obra precisa á los mismos, puesto que, sin mas que copiar, con vista de los formularios y modelos que contiene, cumplen con todas sus atenciones, y sirven sus cargos con la precision que se les exige conforme á las disposiciones vigentes. Contiene actas de las sesiones de todo el año, acuerdos sobre arbolados, caminos vecinales, capturas, caza y pesca, comisiones, comunicaciones, contribuciones, cuentas generales, mensuales de ingresos y gastos, empréstitos, instruccion primaria, juicios, montes, movimiento de poblacion, pago de contribuciones, partes, nombramiento de peritos, posesion de empleos, pósitos, presupuestos, profesores de sanidad, propios, quintas, suministros, etc.; todo cuanto tiene que hacer, hasta el modelo del mas insigni-

ficante oficio. Un tomo en 4.º mayor 20 reales.

MANUAL DEL ALCALDE en el ejercicio de funciones judiciales. Contiene el primer tomo ó sea la parte civil, todo lo concerniente á juicios de conciliacion, citaciones á personas presentes ó ausentes; dias hábiles para la celebracion; registros de citaciones; libros de actas; testimonios; ejecuciones de multas y de conciliaciones consentidas; derechos que se devengan; competencias; modelos de rédulas, expedientes y llamamientos por edictos. Ejemplos de muchos juicios de conciliacion, avenencias verbales, árbitros, negocios urgentes, juicios de testamentaria, intestado y partition, interposicion de retratos, embargos, secuestros, emplazamientos, etc. Este tomo es interesante á los jueces de paz.

El segundo tomo, ó sea la parte criminal, contiene juicios de faltas, toda clase de modelos y ejemplos de ellos, hechos que deben probarse, diligencia de apelacion, ejecucion de sentencias, diligencias criminales, evacuacion de toda especie de despachos, declaraciones y demas actuaciones. Este es peculiar de los Alcaldes. Dos tomos, 10 rs. Cada tomo suelto 6 rs.

EL AUXILIAR DE LOS ALCALDES y ayuntamientos. Trata de las atribuciones de los ayuntamientos, de las de los alcaldes de las de los síndicos y de los deberes de los secretarios. 3 rs.

MANUAL CONTRA INCENDIOS, obra utilísima á las autoridades, 1 real.

FUEROS MUNICIPALES y cartas pueblas, un volumen, 44 reales.

CUADRO SINÓPTICO-DEMOSTRATIVO de la clase de papel sellado que deberán usar, y derechos que corresponde cobrar á los secretarios y porteros de los juzgados de paz, formado con vista de todas las disposiciones legales vigentes en tan importante ramo de la administracion de justicia, por don Vicente Morales Diaz, abogado del ilustre colegio de Madrid, juez de primera instancia cesante, y director del periódico de jurisprudencia «La Thémis.»

Este trabajo, el mas claro, completo y acabado de cuantos se han dado á luz en la materia; indispensable para el buen desempeño de las delicadas funciones encomendadas á los secretarios de los juzgados de paz, se vende á 5 reales.

EL LIBRO DE LOS SECRETARIOS de ayuntamiento, para formar instantáneamente los repartimientos con escrupulosidad, y conforme al sistema decimal, 4 rs.

PLANO DEMOSTRATIVO MÉTRICO-DECIMAL, con el cual puede aprenderse fácilmente el nuevo sistema decimal mandado usar en todas las oficinas del gobierno. Contiene cuanto es necesario y algo mas, 7 reales.

Estas obras se venden en la Comision general de Sierra, Calle de Preciados, núm. 57, entresuelo de la izquierda, Madrid, á quien podrán reclamarse, incluyendo libranza de su importe, que puede obtenerse en las administraciones de estancadas de esta provincia, á favor de D. Gerónimo G. de Sierra, quien desde luego las remitirá francas de porte, por el precio arriba estipulado. En el mismo establecimiento hay un enorme depósito de toda clase de obras, que constan en un catálogo que se remitirá gratis al que lo pida.

Tambien se encarga de recojer las láminas del personal, practicando cuantas diligencias sean precisas, por solo un medio por ciento del valor de la liquidacion, enagenándolas si así se le previniere, por otro medio por ciento.

ORENSE.—1857.

IMPRESA DE D. PEDRO LOZANO.